



DEMOCRACIA LOCAL SOBRE ICE:

**Porque El Gobierno
Local y Estatal
no Gana En
La Ejecución de
Inmigración Federal**

**Un Reporte de Justice Strategies
febrero 2009**

por AARTI SHAHANI y JUDITH GREENE

RESUMEN EJECUTIVO



Más de cinco por ciento de la población de los EE.UU. corre el riesgo de ser deportada, entre ellos doce millones de residentes indocumentados y residentes permanentes legales con ofensas en el pasado. Si bien los programas de forma permanente o temporal para legalizar la condición pueden reducir el número de una manera significativa, no pueden borrar la población en riesgo de deportación. Mientras tanto, más de quince por ciento de las familias de los EE.UU. están integradas por lo menos de un padre que es extranjero (no ciudadano) y un niño ciudadano. Deportación de personas—que por ley deben ser expulsadas de nuestras fronteras—de hecho, son parte integral de las familias, empresas y nuestras comunidades. Esta paradoja complica una pregunta básica: ¿Quién debe hacer cumplir nuestras leyes de inmigración dentro de nuestra nación?

Un breve estatuto aprobado bajo la administración de Bill Clinton y aplicada por George W. Bush ofrece una respuesta a esa pregunta. El programa del 287(g) se refiere a una ley, escrita en 1996 dentro de la reforma integral de inmigración, que por primera vez en la historia de los EE.UU. creó un mecanismo formal para ejecutivos federales para ampliar en las comunidades locales el poder extraordinario de detención y encarcelamiento originalmente en manos de la policía de inmigración en la frontera. Esta descentralización—desplazamiento de la inmigración en manos de las agencias federales a las locales—trae la frontera hacia el interior de nuestra nación.

Creado en 2003, la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en Inglés) es una de las tres agencias dentro del Departamento de Seguridad Nacional. La administración Bush identificó la descentralización de la aplicación de la ley de inmigración como principal estrategia para establecer y fortalecer la capacidad del programa 287(g) como proyecto estelar piloto. El programa recluta a la policía estatal y local, así como el personal penitenciario

para realizar arrestos y detenciones civiles de inmigración, en nombre del gobierno federal.

La descentralización de los organismos de la justicia penal para que cumplan funciones civiles de inmigración añade nuevas preguntas a un viejo debate: ¿Es ICE el encargado de hacer cumplir el mandato y garantizar la seguridad pública? ¿Quién debe pagar por el mandato federal de deportar? ¿Son las autoridades civiles de inmigración y la ley penal compatibles empresas? ¿ICE es competente para supervisar la transferencia de poderes extraordinarios civiles de inmigración a las autoridades locales?

“Democracia Local sobre ICE” examina el programa de la 287(g) en concreto, así como la descentralización de poderes de ICE en general. Hemos realizado una extensa revisión bibliográfica y entrevistas con diversas fuentes, entre ellas dirigentes electos, funcionarios judiciales, expertos de la seguridad, defensores de la reforma migratoria, y activistas. Las siguientes conclusiones contribuyen al debate de la seguridad pública basada en la verdad de estos hechos.

El programa 287(g) ha fallado.

El programa 287(g) ha dañado, no ha servido, nuestra seguridad pública.

ICE ha comercializado el programa 287(g) como una medida que fortalece la seguridad pública expulsando “extranjeros ilegales criminales” fuera de nuestras calles. Pero los poderes civiles de inmigración son incompatibles a esa misión. El derecho penal establece la autoridad suficiente para la policía estatal y local para detener a cualquier persona, incluyendo extranjeros, sospechosos de un crimen. El poder de detención delegado en el marco del programa 287(g) es útil, precisamente, cuando un detenido **no es** un “criminal extranjero ilegal.” Cuando un funcionario no tiene una sospecha razonable de un delito, las autoridades de inmigración aún permiten poderes de detención y encarcelamiento.

ICE le quita las esposas a la ley, y al mismo tiempo distrae a la policía de su principal misión que es garantizar la seguridad pública. Los inmigrantes

son el blanco erróneo de campañas en la lucha contra la delincuencia. Los estudios muestran consistentemente que los inmigrantes tienen una tasa más baja de la delincuencia que los ciudadanos estadounidenses, y cometen menos delitos violentos. Legalmente, el programa 287(g) es equivalente a exigirle a la policía que compruebe la declaración de impuestos de cada persona que detienen por una infracción del límite de velocidad.

Desde el principio, el programa 287(g) fue criticado ampliamente. La “Major Cities Chiefs Association” y otros proponentes de la policía comunitaria, declaran que dichas medidas solo infunden miedo a los inmigrantes para llamar al 911 cuando son víctimas de crímenes. Los académicos de la ley ponen en duda la sabiduría de permitir que las cuestiones constitucionales planteadas por la transferencia de poder o descentralización sean pisoteadas por el poder ejecutivo. El respeto a los derechos civiles son una preocupación clave. Numerosas demandas contra la discriminación por perfil racial en contra del programa 287(g) que descentraliza la autoridad a organismos locales están ahora pendientes.

Cuestiones raciales, no sospecha de delitos, ha impulsado el crecimiento del programa 287(g). En la fase inicial, el ICE no dio prioridad a las regiones más afectadas por la actividad de “extranjeros ilegales criminales”. El FBI y los datos del censo indican que en el 2008—un sesenta y un por ciento de las localidades delegadas por ICE habían cometido delitos violentos contra la propiedad en índices inferiores a el promedio nacional. Mientras tanto, ochenta y siete por ciento tenía una tasa de crecimiento de la población Latina superior a el promedio nacional. El ICE ha firmado acuerdos al rededor de ochenta por ciento de su programa 287(g) con agencias en el sur de los EE.UU. Si bien es cierto que los índices de delincuencia en esa región son más elevados que en otros, el énfasis de ICE en el Sur es desproporcionado y confunde un enfoque balanceado de la seguridad pública.

ICE ha contratado a toda autoridad para subastarse, transfiriendo y delegando facultades de deportación en manos locales mal entrenadas.

Entre los asociados figuran tanto la policía que vigilan la seguridad de nuestras calles y el tráfico y los funcionarios en las prisiones estatales y cárceles locales. En agosto del 2008, más de 840 funcionarios en veinte estados fueron delegados y 70,000 inmigrantes fueron detenidos. Sheriffs, de diferentes condados, componen sesenta y dos por ciento de los asociados de ICE. En el condado de Butler, Ohio, ICE ha ampliado la autoridad para deportar después de que el alguacil buscó su reelección a través de una publicidad nacional anti-inmigrante.

ICE le concedió el más costoso y poderoso contrato del programa 287(g) al Sheriff Joe Arpaio del Condado Maricopa en Arizona aún después de que su mala administración le costó a su condado más de \$43 millones en demandas por muertes y abusos; y después de que trasgredió jurisdicciones vecinas deshaciéndose ilegalmente de inmigrantes en la frontera para deportarlos.

Las personas que violan las leyes de tráfico y jornaleros son los objetivos centrales del programa. ICE afirma que el programa 287(g) no está diseñado para acabar con el hacinamiento en los apartamentos, las actividades de los jornaleros ni los delitos de tráfico. Sin embargo, ICE ha delegado su autoridad a la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri, un organismo cuyo mandato principal es hacer cumplir las leyes de tránsito. Sheriff Arpaio resume el verdadero valor del programa añadiendo, “Cuando paramos un coche sospechoso, además de detener al conductor nos tomamos el resto de los pasajeros.” Su programa 287(g) nombrado como “redadas para la supresión de crimen” se han centrado en los jornaleros y en los conductores de color, incluyen a ciudadanos estadounidenses. En Gaston, Carolina del Norte, noventa y cinco por ciento de las acusaciones presentadas por el programa 287(g), fueron arrestos por delitos menores—60 por ciento por violaciones de tráfico que no son “DWIs”. En Berry Hill, Tennessee, bajo el programa 287(g) la autoridad delegada utilizó su poder de inmigración y en lugar de emitir una multa de rutina—detuvo a un conductor en sus últimos días de embarazo. Ella dió a luz, encadenada a una cama de hospital.

El programa 287(g), establece a los estados y localidades para rescatar al gobierno federal.

El programa 287(g) por ley no otorga fondos.

La ley de 1996 prohíbe a las autoridades federales reembolsar una agencia estatal o local para sufragar los gastos de las detenciones civiles y encarcelamiento. ICE puede haber tergiversado este hecho. Un alguacil en la conferencia de 2007 de la Asociación Nacional de Sheriffs alega que representantes federales de ICE pagan hasta \$90 por día por cada detenido bajo el programa 287(g). En 2006 el Congreso dio a la 287(g) del programa su primera línea presupuestaria de 5 millones de dólares, y la continuación de ese nivel de financiación a través del año fiscal 2008. El dinero se destina solo para la infraestructura de ICE y sus gastos del personal. Sin embargo, a través del año 2008, ICE gastó en exceso por lo menos 50 millones de dólares en costos del programa.

La hoja de datos de ICE incorrectamente representa el programa 287(g) como una red de ahorro de dinero. El programa supuestamente ha ahorrado al estado de Arizona 9 millones de dólares por acelerar la expulsión de inmigrantes de el sistema penitenciario. Sin embargo, esta economía truncada no cuenta los 30 millones de dólares en créditos del Estado, a partir de 2007 hasta el 2009, utilizados para financiar su alianza con ICE. Con un presupuesto de \$2 mil millones de déficit, entre los mayores de cualquier estado de la nación, Arizona todavía no ha detallado completamente los costos de la ejecución de su programa 287(g). Y a pesar de las infusiones de dinero en efectivo, el Condado de Maricopa acumuló \$1.3 millones de déficit presupuestario en los primeros tres meses del programa.

En virtud del programa 287(g), los gobiernos estatales y locales, esencialmente firman un cheque en blanco para reforzar la aplicación fallida de inmigración por parte de ICE. Fondos vinculados a el Departamento de Seguridad Nacional han avivado el rumor de que el programa 287(g) es un generador de dinero. Después de Alabama firmara un acuerdo por el programa

287(g), la ciudad de Hoover absorbió más de \$400,000 de el Departamento de Seguridad Nacional para comprar un nuevo camión de bomberos y de abrir un “Departamento de Seguridad e Inmigración.” Aunque Hoover encontró oro en las colinas de Seguridad Nacional, Prince William de el condado de Virginia, perdió una pequeña fortuna. Cuando el consejo de supervisores del condado aprobó la participación en el programa 287(g), se consignó un extra de \$ 1.4 millones de ingresos de impuestos locales para financiar el primer año. El costo real ascendió a 6.4 millones de dólares y con un nuevo período de cinco años el costo previsto es de 26 millones de dólares. La junta tuvo que aumentar los impuestos a la propiedad por el cinco por ciento y reducir el presupuesto en parte de la policía y los bomberos para rescatar la misión del programa 287(g).

Líderes Fiscales responsables han rechazado el programa. En Morris County, Nueva Jersey, un alcalde Demócrata solicitó un programa 287(g). Sin embargo, un requisito técnico—el suministro de camas de la cárcel local para albergar a los detenidos—sirvió para interrumpir su decisión unilateral. La cárcel del condado del Sheriff Republicano investigó la asociación con ICE. Se constató que un vecino condado perdió 250.000 dólares en imprevistos costos de seguridad y de demandas legales, mientras participaba en la descentralización y en el programa de detención de ICE. Después de enterarse de que ICE no protege a los funcionarios locales de la responsabilidad legal delegada, rechazó la oferta del programa 287(g). Organismos encargados de hacer cumplir la ley a nivel nacional han dicho no a el programa 287(g), porque no sirve al bien común ni al interés organizacional.

La descentralización del programa está destinado a fracasar.

La aplicación civil y penal de la ley son empresas incompatibles.

El programa 287(g) descansa en una presuposición errónea de que el mandato de las autoridades civiles de inmigración puede ser

fácilmente acatado por la misión compartida por el control de delitos y los organismos de justicia penal. Al igual que los universalmente temidos fiscales del Servicio de Impuestos Internos, la autoridad de deportar del ICE corresponde a la ley civil. Pero, a diferencia de el IRS, el ICE es la única agencia federal con el poder para llevar a cabo encarcelamientos civiles en masa. Contra intuitivamente, los funcionarios de ley de inmigración otorga una mayor facultad de búsqueda, de detención, y encarcelamiento que la ley penal. La protección que ofrece la Constitución en contra de la detención sin causa probable, la detención indefinida, no acceso a ayuda legal, la doble incriminación, y auto-incriminación, así como el estatuto de limitaciones, no se aplican ni se administran de igual forma (o, en algunos casos, en absoluto) dentro del contexto de inmigración.

Si bien los parámetros civiles y penales están sujetos a varios factores, el programa 287(g) define estos parámetros por la fuerza ejecutiva. En 2008 la Conferencia de Police Foundation, el director ejecutivo de la Oficina de Coordinación Estatal y Local de ICE sorprendió a la audiencia cuando explicó el valor de poderes civiles de inmigración afirmando: “Podemos desaparecer a cualquier persona”. A nivel nacional, el programa 287(g) ha promovido una mentalidad militante que normaliza ampliamente la idea refutada de que la policía local tiene la autoridad inherente para hacer cumplir las leyes de inmigración. En Arizona, las localidades que aún no se han sumado a el programa 287(g) están deteniendo inmigrantes en nombre de ICE, aún sin ser sospechosos de alguna actividad criminal. En una revisión de la política migratoria vigentes por muchos años, el Departamento de la Policía de Miami ahora afirma que tiene la autoridad inherente para detener a cualquier sospechoso del delito de cruzar la frontera ilegalmente gracias a los poderes federales otorgados por ICE.

El “experimento de Arizona” ilustra cómo realmente la inmigración civil y la aplicación de la ley penal son incompatibles. El Wall Street Journal ha identificado a Arizona el principal laboratorio a nivel local impulsado por la ejecución

de las leyes de inmigración. El primer programa 287(g) de Arizona, promovido por los ejecutivos estatales y federales, aceleró la represión masiva de trasgresiones migratorias. En 2005, un año antes de las legislaturas estatales en todo el país comenzaran a replicar como delitos federales de inmigración en sus propios códigos penales, Arizona abrió el camino al convertirse en el primer estado en la historia de los EE.UU. en promulgar su propia ley internacional del tráfico de seres humanos. La aplicación de la novedosa ley resultó en el enjuiciamiento de casi 500 víctimas, pero no enjuició a ningún jefe traficante.

En Arizona la administración civil de inmigración corrompe rápidamente la misión del sistema de justicia penal. Otra ley abrumó el sistema de libertad bajo fianza porque modifica la Constitución al quitarle a los inmigrantes indocumentados el derecho a la libertad bajo fianza. Arizona cambió el proceso penal en un procedimiento híbrido de inmigración. A la vista de dos años, las autoridades judiciales que eran árbitros neutrales en cargos criminales se convirtieron en fiscales bajo los cargos civiles de inmigración. Fueron obligados a aceptar incluso las denuncias no corroboradas sobre el estatus migratorio por la policía como única prueba para deportar. Los fiscales ya no tienen que demostrar que un inmigrante plantea un riesgo de fuga o de amenaza a la sociedad para imponer la prisión preventiva es decir antes de ser enjuiciados. Denuncia de una violación civil de inmigración hace de otras evidencias irrelevantes.

ICE es incompetente para administrar los programas descentralizados.

ICE sufre conflicto en su misión. Desde su creación, el presupuesto de ICE ha crecido más del 200 por ciento a más de \$ 5.4 mil millones de dólares. Aunque ICE es responsable de la ejecución de inmigración en el interior, es también el mayor brazo de investigación del Departamento de Seguridad Interna. Sin embargo, ICE ha abandonado la “inteligencia” en favor de la fuerza bruta. En el plan estratégico decenal de la Oficina de Detención y Expulsión de ICE, titulado

Endgame, el organismo expone su objetivo de “expulsar a todos los extranjeros removibles”—un objetivo totalmente desconectado de las realidades económicas y medidas de impacto de la seguridad pública. Endgame nota que las diferencias únicas de las normas civiles y penales de detención ponen en peligro la integridad de las operaciones de detención de ICE.

ICE no ha podido supervisar los contratos del programa 287(g) violando la ley federal. Por ley, el ICE es responsable de “supervisar y dirigir” todas las actividades del programa 287(g). Parte del contrato del programa 287(g) “el personal de LEA participante no está autorizado para realizar funciones oficiales de inmigración, excepto cuando se trabaja bajo la supervisión de un oficial de ICE.” En general, las localidades participantes informan que la principal orientación dada por ICE es el entrenamiento de cómo comprobar el estado migratorio a través de medios electrónicos. Sí bien los agentes de inmigración federal suelen recibir cinco meses de instrucción inicial, bajo el programa 287(g) las enseñanzas a los oficiales delegados se comprimen en cinco semanas de curso intensivo. El personal de ICE no conduce ni supervisa directamente los arrestos del programa 287(g). ICE ha aceptado documentación vaga de los organismos delegados, en lugar de pedir cuentas claras y responsables. Frente a las críticas que el Sheriff Arpaio no ha seguido los requisitos de su contrato de ICE, él respondió, “¿Crees que voy a informar al gobierno federal? Yo no les informo de nada.”

ICE continúa fallando a los residentes del Condado de Maricopa. Después de que agentes Latinos del Departamento de Policía de Phoenix fueron arrestados civilmente, el Alcalde de Phoenix Phil Gordon pidió que se le hiciera una auditoría a ICE por sus abusos del programa 287(g) en el Condado de Maricopa hasta el punto de perseguir conductores que manejaban sus carros “sin las luces intermitentes adecuadas”. ICE informó que su investigación interna confirmó que todo marchaba bien. ICE no intervino cuando el Sheriff Arpaio enlistó conocidos activistas anti-inmigrantes como voluntarios para apoyar el programa 287(g) en sus barridas dirigidas a jornaleros y a los conductores

de color. El conservador Instituto Goldwater critica el Condado de Maricopa por su violación aparatosa del contrato de su programa 287(g). Janet Napolitano, el ex-gobernador de Arizona y ahora secretario de Seguridad Nacional, rescindió \$600,000 en fondos estatales del Condado de Maricopa cuando vio las redadas del programa 287(g) fuera de control. El Departamento de Justicia ha iniciado una investigación contra la violación de derechos civiles por parte del Sheriff Arpaio. Sin embargo, ninguna agencia le ha pedido cuentas a ICE por sus repetidos fracasos del programa 287(g) más extenso y más criticado publicamente.

ICE ha fallado en la administración de el programa más extenso de descentralización: detención civil de inmigración. La cuestión de si la aplicación de inmigración debe ser descentralizada por el gobierno federal en manos locales no se puede separar de la cuestión de si ICE es competente para supervisar este proceso legal y organizacional tan complejo. En su corta vida, ICE ya ha sido objeto de ocho auditorías internas de seguridad. La mala administración del sistema de detención, el programa más extenso de descentralización de la autoridad de ICE, es el tema más frecuente. Una auditoría señala, “ICE no está bien posicionada para supervisar la detención de casos que aumenta en número.” Más de ochenta personas han muerto en la custodia civil, pero aún así grupos cabildean a favor de más recursos para ICE y así seguir deteniendo a no ciudadanos que no son considerados como amenaza a la sociedad o en riesgo de fugarse.

RECOMENDACIONES



No podemos poner un precio en materia de seguridad. Pero los ciudadanos no deberían estar obligados a pagar por programas federales que aparentan ser adecuados pero en realidad no lo son. No deberíamos permitir el funcionamiento de un sistema de justicia-penal que ha sido secuestrado por una política de inmigración inadecuada e injusta, reflejo de un sistema de inmigración roto. Este sistema de inmigración ante todo, debe ser arreglado, no debemos deteriorarlo y ni empeorarlo. Para hacer frente a los daños que el programa 287(g) ya ha infligido a la seguridad pública y la democracia local, recomendamos:

La Administración del Presidente Obama debe terminar el programa 287(g).

Es erróneo enfocar la implementación de las leyes migratorias en Jornaleros y conductores que no son de la raza blanca. Este son los objetivos de la aplicación del programa 287(g). El programa solo intenta desviar la atención y ocultar el fracaso federal de la industria que hace cumplir las leyes de inmigración. Al utilizar las autoridades locales y estatales y otorgar a estas jurisdicciones poderes para hacer arrestos civiles, pierden el enfoque en su misión principal que es el de garantizar la seguridad pública. Este programa falla en lograr un balance entre los derechos de la comunidad y la seguridad pública. Esto ha causado daños a ciudadanos estadounidenses, que no son blancos, ha causado serios problemas de funcionamiento al sistema de justicia criminal, y ha impuesto gastos innecesarios a los contribuyentes. Este programa 287(g) debe de ser eliminado inmediatamente.

La Oficina “US Government Accountability” debería investigar el Programa 287(g).

La oficina del “US Government Accountability” (GAO, siglas en inglés) debe investigar extensamente el programa 287(g) para determinar como la implementación de este ha impactado la seguridad pública y cuanto dinero de los contribuciones, locales, estatales y federales ha sido utilizado para implementar este programa. Algunas de las preguntas más importantes a contestarse son: ¿Cómo ICE decide que leyes civiles migratorias y a cuales agencias se les transfiere estos poderes en cada contrato? ¿Cómo los trabajadores de ICE cumplen con el requisito federal de “dirigir y supervisar” cada agencia que participe en el programa? ¿Qué jurisdicciones locales y estatales violaron las secciones del contrato y cuales fueron precisamente esas violaciones que ocurrieron? ¿Quiénes son los más de 70,000 inmigrantes arrestados bajo este programa? Finalmente, ¿Cómo este programa ha desviado recursos monetarios al reducir los presupuestos para otras necesidades más importantes como programas de vigilancia comunitarios de la policía?

ICE afirma que ya ha hecho una investigación interna de todos los contratos otorgados bajo el programa 287(g) y que no encontró errores. Sin embargo, abusos que se han confirmado y que ocurrieron en el Condado de Maricopa en Arizona, en el Condado Prince en Virginia, nos revelan otra historia. Es contraproducente que ICE se investigue así misma y evalúe si sus propios programas están o no fallando. La nueva Administración debe exigir, urgentemente, la información necesaria y adecuada para evaluar este programa, y guiar los esfuerzos para reformar el Departamento de “Homeland Security” y ICE, a través de un análisis independiente que documente cómo este programa cumple pobremente con sus objetivos.

El Departamento de Justicia debe investigar el Programa 287(g).

La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia debe investigar las violaciones a la orden ejecutiva que prohíbe detener o interrogar a personas siguiendo un patrón del perfil racial. Parece que muchas agencias

locales a quienes se les han otorgado contratos bajo el programa 287(g) han continuamente violando las cláusulas y responsabilidades en sus contratos al no mantener expedientes en orden. Por ejemplo, extensas redadas de supresión de crímenes en el Condado de Maricopa y los casos confirmados del uso de perfiles raciales en todo el país, demandan una investigación de cómo este programa cumple con la Constitución de los EE.UU., particularmente, bajo la Enmienda 14 de la Clausula de Protección Igualitaria, y bajo la Enmienda 4 de la Constitución que prohíbe arrestos sin causa probable. Típicamente luego de un arresto por crimen, la persona arrestada puede comenzar un proceso legal para demostrar violaciones constitucionales. Pero las víctimas de arrestos civiles ilegales de inmigración presentan un obstáculo práctico y legal para retar violaciones constitucionales a estos arrestos: Estas personas son deportadas. El Departamento de “Homeland Security” debería adoptar la prohibición del uso del perfil racial que el Departamento de Justicia ha implementado.

El Congreso debe requerir un análisis de como la raza impacta la implementación de programas de inmigración antes de autorizar nuevos programas que implementen leyes de inmigración.

En el siglo 21, ciudadanos que no son estadounidenses, son en su gran mayoría hoy gente de otra raza que no es blanca. Los esfuerzos para implementar las leyes de inmigración, aunque no intencionalmente basadas en la raza de los individuos, tienen un impacto desproporcionado en personas que no son blancas, incluyendo ciudadanos estadounidenses. El programa 287(g) en el condado de Maricopa, por ejemplo, ha permitido el uso del perfil racial. Dada la conexión entre el estatus migratorio y el color de la piel, el gobierno federal, tiene que conducir un análisis del impacto del uso del perfil racial en los esfuerzos para implementar las leyes de inmigración.

El Congreso debería crear requisitos mandatorios de reportes con información valiosa y de importancia, que sirva para evaluar todas las operaciones de ICE.

Debido a la crisis económica global, los EE.UU. no pueden darse el lujo de gastos superfluos e innecesarios, que corresponden a intereses políticos. El presupuesto de ICE esta por encima de una evaluación pública de cómo usa sus recursos. ICE es una agencia nueva con una misión complicada. Reportes internos que son llevados a cabo por la Oficina del inspector General indican que ICE rutinariamente falla en coleccionar datos que son necesarios e importantes para poder evaluar su trabajo y el impacto de sus programas. Las reformas migratorias del año 1996, colocaron como guía central el uso de poderes de la fiscalía para implementar leyes migratorias. ICE tiene poderes extraordinarios para crear programas y derecho total de reservar discreción sobre sus acciones. ICE no revela a quienes escoge como colaboradores a nivel local y estatal, en sus programas de transferencia de poderes, y no crea reportes adecuados de sus programas y operaciones. Lagunas en la recolección de información son detrimentales a las evaluaciones externas de una agencia pública. El Congreso debe exigir a ICE una evaluación basada en la documentación consistente y transparencia de los datos que concierne la implementación y los impactos que tienen todos sus programas.

